



**Ministerio Público**

**Procuración General de la Nación**

“L , Javier Alejandro s/causa N° 11.919”

S.C.L. 332, L. XLVI.-

**S u p r e m a   C o r t e :**

**I**

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, por mayoría, modificó la calificación legal del hecho por el que oportunamente se lo condenó a Javier Alejandro L -partícipe secundario del delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública- por la de autor del delito de encubrimiento (art. 277, inciso c, del Código Penal), imponiéndole la pena de un año y ocho meses de prisión cuya ejecución dejó en suspenso (fs. 2/10).

Contra ese pronunciamiento, la defensora oficial interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria por las razones que lucen a fojas 30, dio lugar a la articulación de esta queja.

**II**

En la apelación federal la recurrente tacha de arbitraria la decisión impugnada, pues considera que la modificación del encuadre legal del hecho implicó, a su entender, una alteración del objeto procesal que en ningún momento fue objeto de debate, incurriéndose en una clara afectación de los principios de congruencia y en detrimento del derecho de defensa (fs. 12/27).

Refiere en este contexto, que lejos de brindarse alguna respuesta a su planteo tendiente a demostrar la insuficiencia de pruebas que pudieran acreditar algún grado de participación de su asistido en la sustracción del vehículo secuestrado en su domicilio, se convalidó la decisión del tribunal oral con argumentos dogmáticos al apartarse de las constancias de la causa, por lo que solicita su descalificación como acto jurisdiccional.

Concluye que con aquella modificación resuelta por el *a quo*, se la privó de la oportunidad de rebatir la imputación en orden a tal delito, toda vez que L fue procesado y enjuiciado por otro distinto.

**III**

Tiene dicho V.E. que cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva adopten los jueces, el hecho que se juzga debe

ser exactamente el mismo que fue objeto de imputación y debate durante el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva (Fallos: 315:2969; 319:2959, votos de los doctores Petracchi y Bossert; 321:469; 324:2133, voto del doctor Petracchi).

En este mismo orden de ideas, resulta importante destacar el criterio que emerge del segundo de dichos precedentes con base en la doctrina sentada en Fallos 242:234, en cuanto a que el cambio de calificación por el tribunal en tales supuestos será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole “formular sus descargos”.

Entiendo que esta última circunstancia no se configura en el *sub júdice*, pues tal como lo señaló el vocal preopinante, ya en su indagatoria el encausado fue debidamente impuesto que, alternativamente a la sustracción del vehículo en cuestión, se le imputaba el haberlo “...recibido o adquirido, con conocimiento de que el mismo provenía de un delito y con ánimo de lucro...” (ver fojas 6, voto de la doctora Liliana E. Catucci).

Repárese que el relato de los antecedentes del caso en la propia apelación federal permite advertir que, más allá de las críticas contra las razones invocadas por el tribunal oral para atribuirle a L su participación en el robo, la defensora oficial de la instancia, al recurrir la condena, también descartó la posibilidad de reprocharle aquella conducta al señalar expresamente que ninguno de los testimonios que invocó a tal efecto, autorizaban a aseverar que su asistido podía conocer el origen ilícito del rodado y, mucho menos, que hubiera ofrecido su casa para preservar el producto del delito (fs. 15/15 vta.).

Por tal motivo, no se alcanza a vislumbrar y, menos aún, la recurrente llega a demostrar, cuáles fueron las defensas y medios de prueba que le impidió ejercer la adecuación del hecho a la nueva figura penal que el *a quo* consideró aplicable y en razón de la cual, incluso, impuso una pena más benévola. En otras palabras, lo expuesto



*Ministerio Público*

*Procuración General de la Nación*

"L , Javier Alejandro s/causa N° 11.919"

S.C.L. 332, L. XLVI.-

impide comprender en qué consistió la variación que, a juicio de la quejosa, habría perjudicado la situación del imputado, a pesar de que esta última circunstancia es la que importa y decide la cuestión (conf. Fallos: 242:227 y 456; 310:2094).

En tales condiciones, el recurso extraordinario carece de la debida fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48 al no alcanzar a demostrar, en las circunstancias concretas del *sub lite*, la vulneración de la garantía constitucional invocada. De esa forma, el planteo que allí se realiza, sólo se dirige a cuestionar aspectos de hecho, prueba y derecho común cuyo conocimiento, por regla, resulta ajeno a esta instancia excepcional, y que al ser resueltos con suficientes fundamentos de igual naturaleza descartan la tacha de arbitrariedad alegada.


**IV**

En consecuencia, opino que V.E. debe desestimar la presente queja.

Buenos Aires, <sup>30</sup> de mayo de 2011

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

  
ADRIANA M. MARCHISIO  
Prosecretaría Administrativa  
Procuración General de la Nación  
04-03-11